

**INTERPONGO RECURSO DE APELACIÓN. FUNDAMENTO EL RECURSO**

**JUZGADO CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES III NOMINACIÓN**

**JUICIO: LORENZETTI MARIA PAOLA (CESIONARIA DE FALCO ANA BEATRIZ) C/ QUEVEDO HECTOR S/ COBRO EJECUTIVO**

**EXPTE: 1220/15**

**Dr. Martín Alejandro Santana Vacas**, letrado apoderado de la parte demandada, a V.E. me presento y respetuosamente digo:

- **OBJETO**

No estando conforme con la sentencia dictada por V.S. el 30/11/2023, en tiempo y forma (arts. 766 y 767 del CPCCT), es que vengo a interponer en contra de la misma, recurso de apelación y a expresar agravios. Concedido el mismo, se deberá correr traslado a la parte actora por el plazo de ley, y oportunamente revocarse por contrario imperio.

- **EXPRESO AGRAVIOS**

El Recurso de apelación que se interpone cumple con los Recaudos de admisibilidad previstos por el CPCCT, ya que la sentencia recurrida fue notificada en mi casillero digital el 01/12/2023, por lo que la expresión de agravios se presenta en tiempo y forma.

La Resolución es recurrible mediante la interposición del Recurso de Apelación de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 753, 754 inc. 1 y 766 inc.1 del CPCCT.

Se plantea dentro del plazo legal de 10 días de su notificación de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 754 inc. 2 y 767 en su segundo párrafo del CPCCT.

Cumple con las formalidades y condiciones pertinentes para su interposición al ser presentada antes el Juez que dictó la Resolución impugnada, mediante escrito debidamente fundado, el que contiene una crítica concreta y razonada de la Sentencia, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por los Arts. 754 inc. 3 y 777 del CPCCT.

Una vez concluido el trámite por ante el Juzgado de primera instancia del Recurso de Apelación interpuesto por esta parte, deberán elevarse los autos a la Excm. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala II, por haber intervenido con anterioridad.

Mi mandante cuestiona la Sentencia recurrida con plena legitimación, ya que la misma le causa agravio concreto. A continuación, expresaré los agravios que me causa la sentencia recurrida del 30 de noviembre del 2023 dictada en los autos del rubro, en base a los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos:

- Respecto de la **INHABILIDAD DE TITULO**:

I – Me agravia la sentencia recurrida en cuanto expresa: “...Liminarmente, resulta oportuno recordar que el demandado como primer punto de su escrito de responde, se notifica del contenido de la escritura de cesión N° 142 referida a la Cesión de Acciones y Derechos Litigiosos otorgada por Ana Beatriz Falco a favor de María Paola Lorenzetti, que fue proveída en fecha 28/04/2023 teniendo presente la cesión adjuntada, decreto que se encuentra notificado y firme, no habiendo formulado el ejecutado oposición, impugnación u observación alguna a la referida cesión. Por el contrario, el mencionado acto jurídico, fue esgrimido como fundamento principal de la defensa que se trata en este apartado.-...”.

Me agravia esta consideración del *a quo*, en cuanto señala que el ejecutado no ha formulado impugnación u observación alguna a la referida Cesión. En realidad, esta parte ha opuesto excepciones en base a la Escritura Pública acompañada por la cesionaria, todo ello de conformidad a lo que establece el artículo 1621 del CCYCN como causa de extinción de la obligación, ya que tiene un efecto liberatorio para el ejecutado, lo que torna inhábil al crédito reclamado. Se trata de un Instrumento Público que hace plena

fe, en donde el Sr. Quevedo no ha tenido ninguna intervención y ha objetado el contenido de las declaraciones de la convención de la mencionada Cesión, de la que se desprende que la parte cedente ha desistido de la condición de acreedora y litigante en dicho juicio sin especificar en qué juzgado se tramita el juicio, ni mucho menos el N° de expediente para saber con precisión cuál es el objeto cedido.

Por otra parte, como bien lo ha manifestado mi representado cuando opone excepción de Inhabilidad de Título, que ha negado la existencia de la deuda de manera categórica desconociendo absolutamente a la ejecutante Falco Ana María con quien nunca tuvo trato alguno, y mucho menos haber contraído una deuda documentada en el pagaré que se ejecuta. Es más, mi mandante desconoció la firma acerca del mismo, y que para el caso de que la firma no fuera adulterada, el documento proviene de un ilícito legal o de una situación deshonesta contraria al ordenamiento cambiario. Confunde el *a quo* la existencia del contrato de Cesión de Acciones y Derechos litigiosos, con la ausencia de legitimación activa y pasiva, por ser esta última la defensa que esta parte opuso, porque ante la falta de legitimación activa y pasiva la deuda reclamada devino en inexigible.

II – Me agravia además, la sentencia recurrida en cuanto expresa: “...Así, el demandado adujo que el pagaré que se ejecuta es inhábil por inexigible y falta de legitimación activa y pasiva. Como fundamento de su postura, añade que la inexigibilidad parte del propio texto de la escritura de cesión mencionada precedentemente, ya que con ella, la cesionaria no justifica ser titular del derecho invocado, dado que la cedente manifiesta expresamente en el citado instrumento, que desiste de la condición de acreedora y litigante en este proceso como así también del ejercicio de todas las acciones y derechos que en tal carácter podían corresponderle.- No le asiste razón al excepcionante, respecto al efecto que pretende darle a las expresiones contenidas en la Escritura Pública en cuestión. Resulta claro, que la voluntad de la cedente al manifestar que "... desiste a favor de la cesionaria mencionada, de la condición de acreedora y litigante en dicho Juicio y del ejercicio de todas las acciones y derechos que en tal carácter podían corresponderle a partir de ahora y sin limitación alguna, colocándola en el

mismo lugar, grado y prelación que tiene y puedan derivarse del referenciado juicio de que se trata y la subroga para tomar intervención y proseguir hasta su terminación el mismo..." (el subrayado me pertenece), es la de renunciar al rol de parte actora para que la cesionaria se subroque en el mismo, transmitiendo justamente la legitimación activa en cabeza de quien será a partir de ese momento, la parte ejecutante.-...".

Del contenido de la Escritura de Cesión se puede ver que el cedente manifiesta que desiste a favor de la cesionaria de la condición de acreedora y litigante en dicho juicio.

De la literalidad del texto, surge de manera inequívoca que la Sra. Lorenzetti ocupa el lugar de "desistida" ya que la Sra. Falco había desistido de su condición de acreedora y litigante en dicho juicio. Entonces, el lugar que ocupa la cesionaria es el de "desistido" de la condición de acreedora y litigante en dicho juicio, colocándola en el mismo lugar grado y prelación, que no es otro que el de "desistir de la condición de acreedora y litigante en dicho proceso", y no como ha interpretado el *a quo*.

Según el diccionario de la real academia española de lengua, desistir significa apartarse de una empresa, y en sentido forense, aludiendo a un derecho significa abdicarlo o abandonarlo. Entonces, ello significa el abandono que hace el cedente a través de una declaración de voluntad formulada ante el notario de su desistimiento de su condición de acreedora y litigante en el juicio.

De lo antes mencionado, se puede concluir que la interpretación que ha dado el *a quo* al texto expreso de lo convenido por las partes en la Escritura N° 142 que antes mencioné, son conclusiones hermenéuticas al margen del texto expreso de lo convenido. Es por eso que, en ese caso como bien lo han dicho los Tribunales Superiores es contraria a derecho la sentencia que formula conclusiones hermenéuticas al margen del texto expreso de lo convenido. Sobre ese tópico la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sentencia N° 88 del 01/03/04 estableció como doctrina legal que: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido a la sentencia que asigna a las cláusulas del contrato celebrado por las partes, un alcance reñido con la literalidad de su texto y con los principios que deben guiar la exégesis del mismo".

El *a quo* ha procedido a realizar de manera arbitraria una exégesis de lo convenido entre el cedente y el cesionario, cuando en realidad correspondía limitarse a lo que las partes acordaron en el contrato de Cesión, y que era precisamente de que la cedente desiste de la condición de acreedora y litigante en dicho juicio. Todo ello, ha sido debidamente fundamentado y postulado por esta parte al oponer excepciones, lo que no ha sido tratado por el *a quo*.

Por lo tanto, resulta indudable que existe una falta de legitimación pasiva de mi representado, y también por supuesto, falta de legitimación activa de la cesionaria, como se opuso en la excepción correspondiente al momento de contestar demanda u oponer excepciones.

En esas condiciones jurídicas, es indudable que el instrumento que se ejecuta es inhábil por ser la deuda inexistente e inexigible, y además por falta de legitimación activa y pasiva, por no ser acreedor ni deudor con motivo del desistimiento que se expresó en la Escritura N° 142.

Me agravia además que no se haya tenido en consideración lo dispuesto en el artículo 1003 de CCYCN respecto al objeto de los contratos que deben ser determinados. Al respecto el artículo 305 del CCYCN inciso c) señala que la Escritura debe contener entre otras cosas la naturaleza del acto y la individualización de los bienes que constituyen su objeto. Atento al contenido negocial de las Escrituras Públicas, de las declaraciones de los comparecientes y otorgantes deberá surgir la naturaleza de aquel, y del contenido de la Escritura N° 142 es indudable que nos encontramos ante una Cesión de Acciones y Derechos litigiosos.

El artículo 1618 del CCYCN establece que deben otorgarse por Escritura Pública la Cesión de Derechos Litigiosos. La doctrina y la Jurisprudencia es pacífica en entender que se define la Cesión de Derechos litigiosos como el acto jurídico mediante el cual una persona se obliga a transferir a otra los Derechos y Acciones que le competen en el marco de una relación procesal iniciada y vigente tanto actuando como parte activa, reconviniente o adhesiva, teniendo por tal en las actuaciones judiciales en que tales derechos y acciones resulten controvertidos, hasta el momento del dictado de una sentencia definitiva firme.

Por otro lado, y en lo que respecta a la precisa descripción del objeto del Derecho litigioso según lo dispone el artículo 305 inciso c) del CCYCN debe cumplirse de manera estricta, ya que el incumplimiento de estas exigencias es motivo de irregularidad formal del documento con incidencia directa sobre el negocio allí consignado por tratarse de un objeto que no está debidamente identificado o que pueda no existir a la fecha del documento. Es así que, el instrumento así otorgado carece de validez por falta de determinación del objeto del contrato.

De la Escritura de Cesión de Acciones y Derechos litigiosos otorgado el 31 de mayo del 2018 se puede ver en primer lugar que no se identifica en los términos del art 305 inciso c) del CCYCN, cuál es el objeto de la Cesión de los derechos litigiosos o en todo caso, que esa transferencia de esos derechos litigiosos haga referencia a este proceso por lo siguiente: porque no se identifica el Juzgado donde tramita el expediente identificado y tampoco el N° de expediente, tampoco se identifica cuál es el monto de la demanda y porque para el hipotético caso que se tratara de este proceso a la fecha del otorgamiento de la Escritura de Cesión no constituía derechos litigiosos, por cuanto no había litigio, ya que al estar a las constancias de autos a esa fecha la Sentencia de Trance y Remate dictada el 15/06/2015 había quedado firme, y por lo tanto ya no había derechos litigiosos.

De acuerdo a los argumentos expresados por esta parte deberá revocarse la sentencia recurrida por inexistencia e inexigibilidad de la deuda rechazándose la ejecución con constas a la parte actora.

III – Me agravia también la sentencia recurrida, en cuanto expresa: “...Desde esta perspectiva, en autos, la cesión de derechos efectuada por la actora es eficaz a los efectos procesales, toda vez que operó la llamada “extromisión o sustitución procesal”, pues mediante providencia de fecha 28/04/2023, se dispuso tener presente la cesión adjuntada, dándose por notificado el demandado, sin formular oposición conforme ya se dijo y por lo tanto, se encuentra firme y consentida.- Por ende, el argumento expuesto por el demandado resulta inidóneo a fin de cuestionar la habilidad del pagaré ejecutado, pues no se orienta a observar las características extrínsecas del

título cambiario que, en el caso, se encuentran formalmente cumplidas, sino que con ello se intenta incursionar en un examen improcedente respecto a la legitimación activa de la cesionaria.-...”.

Me causa agravio esta consideración del *a quo* por cuanto surge de manera nítida, que el *a quo* confunde el planteo que ha efectuado esta parte al momento de la oposición de excepciones, ya que como bien lo he expresado en su momento, la excepción de inhabilidad de título es procedente no solo cuando se cuestiona la idoneidad jurídica del instrumento base de la demanda, sino también porque el ejecutante o el ejecutado carecen de legitimación procesal, que es precisamente lo que ocurre en este caso ya que el cedente ha “desistido” de la condición de acreedora y litigante en dicho juicio, colocándola en el mismo lugar grado y prelación, que no es otro que el de “desistir de la condición de acreedora y litigante en dicho proceso”, y no como ha interpretado el *a quo*. De ello se concluye indefectiblemente que el título es inhábil, por cuanto el mismo resulta inexigible por deuda inexistente.

- Respecto de la **FALSEDAD MATERIAL DE TITULO:**

**IV –** Me agravia la sentencia recurrida en cuanto expresa: “...Corrido traslado del mismo a las partes, en fecha 16/08/2023 (hs. 12:21) el demandado no impugna el informe pericial, realizando solamente pedido de aclaraciones al perito, quien en fecha 22/08/2023 (hs. 16:32), contesta en el sentido que "Las explicaciones que se solicita no guarda relación con el cuestionario propuesto en el OBJETO DE PERICIA del Cuaderno de Prueba del demandado N° 3, si bien la parte demandada se encuentra en el derecho de efectuar todas las observaciones que crean pertinentes a la pericial caligráfica, los mismos deben estar basados en una estricta relación con el cuestionario referido al OBJETO DE PERICIA y no meramente subjetivos en donde se solicita ampliación y aclaración de un trabajo pericial que cumple con justeza y precisión el análisis que sustenta dicho informe y de ese modo llegar a una conclusión definitiva".-  
... “Por ello, no habiendo sido objeto de impugnación el dictamen pericial, surge en el Suscripto la convicción de que el pagaré ejecutado, base de la presente acción, presentado con firma verdadera, constituye un acto voluntario susceptible de producir efectos legales y que la pericia practicada en autos,

resulta decisiva para determinar la suerte negativa de la defensa introducida, pues posibilita formar la convicción al Sentenciante, de la pertenencia de la firma inserta en el pagaré a la mano calígrafa de la parte demandada, más aún cuando no obran en autos otros elementos que desvirtúen tal prueba, resultando las conclusiones del perito actuante, terminantes y concluyentes para la resolución del caso.- En mérito a lo considerado, corresponde no hacer lugar a la excepción de falsedad material de título deducida por el demandado y ordenar llevar adelante la presente ejecución iniciada por la actora.-...”.

Mi representado al momento de contestar demanda, opuso excepción de Falsedad de Título, en base al Principio XVI de Eventualidad Procesal, previsto en la Ley 9.531. Mi mandante negó la existencia de la deuda que se ejecuta de manera categórica, desconociendo absolutamente a la ejecutante Falco Ana María con quien nunca tuvo trato alguno, y mucho menos haber contraído una deuda documentada en el pagaré de la ejecución. Por ello, desconoció la firma acerca del mismo, y que, para el caso de que la firma no fuera adulterada el documento proviene probablemente de un ilícito legal o de una situación deshonesta contraria al ordenamiento cambiario.

En razón de haber cuestionado la adulteración total del documento, es que esta parte solicitó al Sr. Perito calígrafo que amplíe la pericial caligráfica dado que el Sr. Quevedo ha formado un cuerpo de escritura de siete hojas y por las razones que expresé con anterioridad solicité que el Sr. Perito se expida aclarando si el cuerpo de escritura del margen inferior izquierdo del pagaré referido al nombre y apellido, dirección, provincia y DNI, corresponden a la escritura del Sr. Quevedo, para el supuesto de que no fuera letra escrituraria del Sr. Quevedo, el Sr. Perito aclare si se trata de la letra de la Sra. Ana Beatriz Falco, teniendo como instrumento indubitado la firma de la Sra. Falco en el escrito de demanda, y para el caso de que tampoco fuera la Sra. Falco aclare si la letra pertenece al puño y letra de la persona que solicitó el informe de situación dominial agregado a fojas 28 de este expediente, y que está rubricado por el Sr. Lorenzetti Eugenio Roque, todo ello en razón de estar justificado el pedido para evitar un fraude a la ley constituido por la transmisión de pagarés en violación a la regla establecida en el art. 36 de la LDC y la circulación de los títulos de crédito. Por todo ello, me agravia que no se haya dado el trámite



previsto por la LDC luego del resultado de la pericia, y las particulares circunstancias de este proceso.

Ante la posibilidad de ser aplicable la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240), porque es evidente que se trata de un pagaré de consumo luego de los vestigios acreditados en las constancias de autos y de las pruebas denegadas por el *a quo*, por tratarse de una Ley de Orden Público y que goza de garantía constitucional, solicitamos que V.E., otorgue el trámite previsto por el art. 52 de la LDC.

- Respecto de la **TASA DE INTERÉS APLICABLE**:

**V** – Me agravia la sentencia recurrida en cuanto expresa: “...En cuanto a la actualización del capital condenado, adhiriendo al criterio sentado en el fallo N° 391 de fecha 20/10/2023, dictado por la Excm. Cámara del Fuero - Sala 2, en los autos caratulados "LOZUA EDUARDO LUIS c/ VIALNOA S.A. Y OTROS/ COBRO (ORDINARIO). EXPTE. N° 2607/22", corresponderá calcular los intereses, aplicando la tasa pasiva que fija el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha de la mora (20/12/2014), hasta la fecha del efectivo y total pago. Ello así, por cuanto cabe tener presente en primer lugar, que este proceso inició en fecha 09/03/2015, siendo destacable que el proceso tramitado en todas las instancias por la que transitó, lleva ya un período de tiempo de ocho años y casi nueve meses. En este contexto, cabe considerar que toda persona tiene derecho a que se determine sus derechos y obligaciones dentro de un plazo razonable (art. 8.1 CADH), lo que tiene incidencia directa con el acceso a una tutela judicial efectiva, principio expresamente reconocido en el nuevo C.P.C.C. Ley N° 9.531.-... En definitiva, lo que se busca imponiendo una tasa de interés moratorio es mantener incólume el capital del acreedor por el retardo en el cumplimiento imputable al deudor, su importancia, cualquiera que se adopte -pasiva o activa-, radica en que no sea negativa. De ser ello así, su influencia en un lapso prolongado -como el de un juicio- terminaría licuando el capital de condena.- En este punto, si tenemos en cuenta que realizada la comparación de actualización de capital con la tasa activa que cobra el Banco Nación Argentina, con la actualización basada en la tasa pasiva que fija el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha de la mora hasta la

del último índice disponible, los resultados arrojados son de \$352.314,98.- con la tasa activa y de \$868.079,51.- con la tasa pasiva, surge evidente que la actualización mas compatible con el criterio apuntado precedentemente, es la última señalada.- Con ello, se evidencia que una definición apriorística a través de una doctrina plenaria puede conducir a fijar una tasa que -aun cuando sea activa- en el largo plazo sea negativa y no mantenga inalterable el monto que se otorgue. Frente a ese panorama, el juez debe resolver cuál es la tasa aplicable en cada caso con parámetros de equidad y realidad y con el límite de lo peticionado por el acreedor.-...”.

Me causa agravio la sentencia recurrida por cuanto es una sentencia arbitraria, violatoria del test de razonabilidad en relación al cálculo de los intereses, por lo que aplicar al capital demandado el interés de la tasa pasiva que fija el Banco Central de la República Argentina luce totalmente descontextualizado y contrario a derecho.

Estando vinculada la cuestión con la determinación de los intereses moratorios, la norma general aplicable al caso es el artículo 768 del CCYCN. En ese contexto, cabe destacar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Banco Sudameris c/ Belcam S.A. del 05/07/1994” que, en consonancia con lo que establece el artículo antes citado establece que la determinación de la tasa del interés moratorio es una cuestión propia de valoración de los jueces de mérito, si no se hubiere fijado una tasa de interés legal. También, cabe citar el fallo de la causa “Di Donato Roberto Fabio vs. Inmsol IMICASA S.A. y otro s/ Cobro Sumario. Inc. De Ej. Honorarios” del 31/05/2012, en cuanto estima que cuando corresponda la ponderación de los jueces de mérito en primer lugar la misma debe atender a los datos concretos del caso, y segundo, a las circunstancias socioeconómicas imperantes al momento de su dictado. Ello configura un test de razonabilidad en cuyo defecto, cualquier decisión deviene arbitraria.

Si nos atendemos a los datos concretos del expediente citados por el a quo cabe mencionar que es verdad que el proceso se inició el 09/03/2015, y que es verdad que tramitó en todas las instancias y que ya lleva un periodo de 8 años y casi 9 meses, y que también es verdad que toda persona tiene

derecho a que se determinen sus derechos y obligaciones dentro de un plazo razonable. Pero también es verdad que esta demora en el proceso no es imputable a mi mandante, por cuanto el actor ha obtenido Sentencia de Trance y Remate el día 15/06/2015, y desde esa fecha hasta el 10/12/2020, fecha en que se apersona mi mandante a este proceso y plantea Incidente de Nulidad de todo lo actuado, han transcurrido casi 6 años. El planteo de Nulidad de todo lo actuado como dice el *a quo* ha pasado por todas las instancias y ha prosperado mediante sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema de Justicia el 23/03/2023 declarando la Nulidad de la notificación cursada el 24/04/2015 y de todos los actos que hayan sido dictados en su consecuencia. Ergo, la demora que hace referencia el *a quo* conforme lo ha resuelto el Excelentísimo Tribunal, es imputable al actor o a quienes realizaron los actos procesales nulos, y no precisamente al Sr. Quevedo como ya lo expresé anteriormente.

Concluyendo con este tópico, para clarificar la cuestión en lo que respecta al retardo del proceso imputable al actor, que la conclusión a que arriba el *a quo* no se adecua a las reales condiciones de lo ocurrido en este expediente ya que, si bien es cierto el expediente se inició en el año 2015, lo cierto es que recién se dispuso intimar de pago a mi mandante el Sr. Quevedo Héctor Ricardo, mediante proveído del 28/04/2023. Y siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, este letrado procedió a contestar espontáneamente la demanda y a oponer excepciones mediante escrito presentado el 10/05/2023, a pesar de que aún la parte actora ni siquiera había abonado la tasa proporcional de iniciación de juicios desde el año 2015 a la fecha en que provee la demanda en el año 2023, continuando el proceso su trámite conforme lo establece el Código ritual. Luego de tramitarse el mismo se dictó sentencia en primera instancia el 30/11/2023. Por lo que, del simple cotejo de fechas se puede ver que desde el proveído que ordena la intimación de pago a la parte demandada, y el dictado de la sentencia del 30/11/2023 han transcurrido solamente 6 meses, de allí que se puede advertir claramente que la demora de este proceso no es imputable a mi mandante, sino todo lo contrario, la demora es imputable a la parte actora que pretende verse favorecida con la aplicación de una tasa de interés contraria a derecho de

acuerdo a las particularidades de este caso, ya que los argumentos de la misma para aplicar esa tasa no se atiende a los datos concretos del caso, por lo que no supera el test de razonabilidad deviniendo la decisión en arbitraria.

Por otro lado, y siempre atendiendo a los datos concretos del caso creo necesario resaltar que la Escritura N° 142 de Cesión de Acciones y Derechos litigiosos acompañada a este proceso por la Sra. Lorenzetti María Paola, y realizada en San Miguel de Tucumán el 31/05/2018 por ante el Escribano Carlos María Terán, titular del Registro N° 57, se expresa que la Cesión se realiza por el precio total de pesos setenta y ocho mil (\$ 78.000). De esa expresión formulada por los contratantes en la Escritura a que hice referencia, se desprende un sentido totalmente contrario al expresado en los fundamentos del *a quo* para aplicar la tasa pasiva a este proceso. Es decir que el contrato de Cesión realizada mediante Escritura N° 142 el 31/05/2018 tiene el mismo monto que el pagaré base de esta demanda, por lo que el argumento del *a quo* se cae por su propio peso. De allí que se puede concluir como límite de cualquier reparación en lo que respecta a la aplicación de la tasa de interés, es el enriquecimiento a costa del demandado. Ese debe ser el límite que no debe vulnerarse ya que está delimitado por el empobrecimiento del demandado, más allá de que pueda reconocérsele un crédito al actor, sobre todo teniendo en cuenta las particularidades de este proceso.

Causa agravio y merece destacarse como párrafo aparte que al momento de la celebración de la Escritura de Cesión y Derechos litigiosos N° 142 del 31/05/2018 ya se había dictado sentencia de Trance y Remate el 15/06/2015 y estaba firme, y la misma disponía aplicar el interés de la Tasa Activa del Banco Nación de la República Argentina, de lo que se concluye que eso es lo que transfirió la cedente, y eso es lo que adquirió la cesionaria. Indudablemente se concluye que para la hipótesis elaborada por el *a quo* en la sentencia, es inviable aplicar una tasa de interés diferente, o sea la tasa pasiva del BCRA, porque en este caso debe estarse a lo que prevé el art. 399 del CCYCN. Es decir, que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, y a contrario, nadie puede adquirir un derecho más extenso que el transmitido. Estas razones son más que suficientes para hacer lugar al Recurso de Apelación en este punto y revocar la sentencia que recurro.

VI – Me agravia también la sentencia en cuanto expresa: “...Bajo estos lineamientos, no resulta razonable en el presente caso, aplicar una tasa que no contempla -ni mínimamente- la inflación ocurrida en ese período, desatendiendo a las situación fáctica del caso concreto y la realidad económica, trasladando los costos de la demora en el recupero de la deuda al actor.- Además, la aplicación de tasas de interés que ni siquiera reflejan la inflación no hace más que menoscabar el derecho de propiedad del acreedor (art. 17, C.N.), con afectación del principio de reparación plena o integral (art. 1740, Cód. Civ. y Com.). Ello debe ser evitado por los jueces, a través de tasas de interés que no favorezcan el incumplimiento -o que alienten a cumplir-, lo cual encuentra sustento en el deber de prevención del daño (art. 1710, cód. civ. y com.).- A los argumentos expuestos se añade la función moralizadora que representa la utilización de la tasa que más se asemeje en el caso al proceso inflacionario, en pos de evitar que el deudor moroso sea premiado por su conducta. Es que, adoptar la tasa activa en el presente caso significa eliminar el incentivo al deudor para dar cumplimiento con su obligación, toda vez que cuanto mayor sea la demora en su cumplimiento, más beneficios obtendrá por su conducta reprochable, llegando al absurdo de licuar sus pasivos adeudados.-...”.

Me agravian estas consideraciones del *a quo* en cuanto concluye que se trasladan al actor los costos de la demora y del recupero de la deuda. En realidad, ha ocurrido todo lo contrario, ya que el actor ha logrado Sentencia de Trance y Remate en fecha 15/06/2015 y hasta la fecha que se presenta el Sr. Quevedo planteando Incidente de Nulidad de la Intimación de pago y traslado de la demanda el 10/12/2020, es decir, a casi 6 años de haber logrado la Sentencia de Trance y Remate. Lo que en realidad ocurre es que el actor intentó beneficiarse con el transcurso del tiempo y el cobro de los intereses por cuanto ello se puede inferir de la actitud observada en este proceso. Lo que realidad pretendía es que la deuda fuera más abultada con los intereses, y así poder rematar el inmueble de propiedad del Sr. Quevedo con su esposa fallecida. Dicho bien inmueble siempre estuvo afectado a la vivienda del grupo familiar.

La parte actora siempre supo donde trabaja el Sr. Quevedo, según el mismo lo ha manifestado en el escrito titulado “EMBARGO PREVENTIVO”, y cuál era su situación laboral en la Provincia de Salta como lo expresó en el escrito de petición de embargo preventivo formulado por la Sra. María Paola Lorenzetti. Ello da por tierra con el argumento del *a quo* respecto de la frustración de los presuntos derechos de la parte actora, ya que, de haber sido diligente, y si hubiera tenido interés, desde el momento de la intimación de pago, o eventualmente del dictado de Sentencia de Trance y Remate ocurrido el 10/06/2015 a la fecha, ya tendría embargado el monto de lo que reclama en este proceso. Pero, en definitiva, no era eso lo que pretende la parte actora, sino que en lo que realidad pretende es subastar el bien inmueble del Sr. Quevedo, sin advertir que el Sr. Quevedo es titular de un bien ganancial. O sea que, se concluye que la sentencia del 30/11/2023 no resulta ajustada a derecho en las concretas y particulares circunstancias de esta causa, ya que de aplicarse la tasa pasiva como lo establece la sentencia en crisis, se estaría favoreciendo al actor a costa del demandado produciéndose un verdadero enriquecimiento sin causa a favor de la parte actora, sobre todo teniendo en cuenta las particularidades de este proceso porque es indudable que ese pagaré firmado en garantía de un préstamo de consumo por la suma de \$ 25.000 otorgado por el Sr. Lorenzetti Eugenio Roque fue llenado por la suma de \$ 78.000. De allí que, favorecer al actor aplicando una tasa de interés en perjuicio de la parte demandada, provoca una lesión al principio constitucional de igualdad por lo que no logra superar el test de razonabilidad por lo que, en este caso concreto la decisión del *a quo* deviene arbitraria y contraria a derecho. Es así que, en función de los argumentos dados en la expresión de mis agravios, V.E., deberá revocar la sentencia recurrida fijando una tasa de interés distinta a la fijada por el *a quo* por lo que resulta razonable fijar la Tasa Activa de Banco Nación de la República Argentina con un tope anual teniendo en cuenta las circunstancias socioeconómicas imperantes.

- Respecto de la **HONORARIOS DE LETRADOS:**

**VII –** Me agravia la sentencia recurrida en cuanto expresa: “...Conforme a los Arts. 14, 15, 38, 39, 44 y cc. de la ley arancelaria y atento a lo exiguo de la base regularoria, se asignará al abogado patrocinante de la parte actora, el

valor de dos consultas escritas, monto que asciende a \$360.000.- (Pesos Trescientos Sesenta Mil), ello así porque de las actuaciones desarrolladas en este proceso, se evidencia la responsable tarea cumplida en la causa por el profesional. Siendo criterio del Sentenciante, quien comparte lo resuelto por la Excm. Cámara del Fuero en los autos caratulados: "IMBAUD, EMILIA DE LOS ANGELES c/ LUCERO IMBAUD PABLO ESTEBAN Y OTROS s/ AMPARO A LA SIMPLE TENENCIA" - EXPTE: 3270/22, Sent. 299 del 11/08/2023, y conforme la labor profesional efectivamente cumplida por el letrado, etapas procesales cumplidas, resultado del proceso, tiempo empleado, la complejidad de la cuestión planteada, la importancia económica y moral que representa para el beneficiario del trabajo la cuestión en debate, la posición económica de las partes, así como las demás pautas del art. 15 L.A., la determinación de los emolumentos en una consulta escrita resultaría bajo conf. arts. 15, 38 y 43 L.A.-...".

Me causa agravio el razonamiento del *a quo* en razón de que luego de determinar que, para regular honorarios del letrado de la parte actora en este proceso ejecutivo, se aplica el art. 39 de la Ley 5.480 el que dice en su parte pertinente: "Que se considerará monto del juicio a los efectos de la regulación de honorarios, habiéndose dictado sentencia... 1. El capital reclamado en la demanda o reconvención, si ésta se hubiese deducido, la actualización -si correspondiere-, sus intereses, gastos, multas, y cualquier rubro que deba adicionarse...".

El artículo está legislando para los casos en que el juicio concluye, sea porque se dictó sentencia que pone fin al juicio (como es este caso), o por sobrevenir transacción. Resulta fundamental subrayar que el monto del juicio lo proporciona la suma reclamada en la demanda o la reconvención si ésta existiere, con actualización e intereses, gastos y multas. Una vez determinado el monto del juicio en los términos previstos por el art. 39 de la Ley 5.480 corresponde aplicar los porcentajes que prevé el art. 38 de la citada ley, según que el abogado o los abogados a quienes se regulan honorarios sean de la parte vencedora o vencida, y que oscilan entre el 11 y el 20 % para el ganador, y entre el 6 y el 14 % para el letrado de la parte vencida.

Me agravia que el *a quo* luego de fijar las pautas para regular honorarios en este proceso sin razón alguna haya dispuesto aplicar una normativa para otro tipo de procesos como es el proceso citado en la jurisprudencia mencionada de amparo a la simple tenencia, que se rige por otras normativas legales en razón de que se trata de un proceso que por su naturaleza jurídica, tiende a proteger un derecho, y por lo tanto, carece de un valor económico, y de allí que los jueces tengan la posibilidad de regular honorarios con una razonable arbitrariedad, y siempre en el marco de las pautas que les acuerda el art. 15 de la Ley 5.480 enumerada en sus distintos incisos. La pauta que aplica el *a quo* teniendo como fundamento lo exiguo de la base regulatoria, y saliéndose de lo normado por la Ley 5.480 para la regulación de honorarios en los procesos ejecutivos, ha variado la regla y ha aplicado pautas regulatorias para otro tipo de juicios como lo es el amparo a la simple tenencia, exorbitando el marco que le proporciona la ley arancelaria para regular los honorarios en el proceso ejecutivo.

En realidad correspondía que el *a quo* tomara las pautas previstas por el artículo 15 de la Ley 5.480 para aplicar el porcentaje entre el 11 y el 20 % como ganador, pero siempre sobre el monto económico discutido en este proceso que no es otro que el monto del juicio, y a partir de allí aplicar el porcentaje que él considera correcto.

Si bien es cierto que los jueces disponen de un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de la naturaleza e importancia del trabajo de los letrados y peritos, lo cierto es que esa discrecionalidad para la ponderación de dichos factores no puede derivar en la aplicación de honorarios que se aparten de los extremos dados por la ley. Para concluir, corresponde aplicar las pautas y las reglas del proceso ejecutivo para regulación de honorarios habiendo base regulatoria de la misma, por lo que es contrario a derecho apartarse de lo que establece la Ley 5.480 aplicando pautas o reglas de procesos de naturaleza totalmente diferente, como lo es un amparo a la simple tenencia, ya que son procesos que por su especial naturaleza fundamentalmente tienden a proteger derechos, carecen de un valor económico. De allí que corresponde que V.E. revoque la sentencia apelada y se regulen los honorarios del letrado de la parte actora de acuerdo a las pautas



previstas para el proceso ejecutivo por la Ley 5.480 debiéndose regular los honorarios en una consulta escrita mínima de acuerdo a lo que dispone al art. 38 último párrafo de la Ley arancelaria.

**VIII –** Me agravia además la sentencia recurrida en cuanto expresa respecto de los HONORARIOS DE LETRADOS, lo siguiente: “...Para el incidente de nulidad ganado por la parte demandada, resuelto en fecha 28/12/2021, confirmada por fallo de la Excma. Cámara del Fuero en fecha 15/06/2022, revocada por fallo casatorio de la Excma. Corte Suprema de Justicia de fecha 23/03/2023 (en donde se impusieron las costas de todas las instancias por el orden causado), regular como honorarios la consulta mínima, establecida en el último párrafo del Art. 38 de la Ley N° 5.480, resultaría a todas luces excesivo, por lo tanto, para la estimación de estos honorarios, se seguirá el criterio adoptado por las tres Salas de la Excma. Cámara del fuero, en el sentido que "el art. 39 última parte de la ley arancelaria local, sólo rige en la primera regulación del juicio y que, en las posteriores se deberá estar a las cifras que resulten de la normativa reguladora y de las operaciones aritméticas" (in re: Nalda Irma G. c/ Paz Carlos D. s/ Cobro Ejec., sent. 33 del 14-02-05, Cám. Doc. y Loc., Sala II, Dres. Manca-Alonso).- Consecuentemente y, conforme Art. 59 L.A., se asignará al letrado patrocinante del actor, el 10% de lo calculado por el principal, y al abogado apoderado de la parte demandada, el 20% respectivo atento a que prosperó su postura.-...”.

Me agravia la sentencia recurrida en este punto y referido al Incidente de Nulidad ganado por la parte demandada por cuanto se toman como pautas lo dispuesto en el art. 59 de la Ley arancelaria y se asigna al letrado patrocinante del actor 10 % de lo calculado por el principal y al abogado apoderado de la parte demandada el 20 % respectivo, atento a que prosperó su postura.

Me agravian los argumentos antes citados por cuanto se toma el Capital y se adicionan los intereses con la tasa pasiva que fija el BCRA, cuyos argumentos sobre el tema ya fueron expuestos con anterioridad y a los cuales me remito en honor a la brevedad, entendiendo además que, se cumple con los recaudos del artículo 777 del CPCCT por ser una remisión a un argumento de este libelo.

La regulación de honorarios de los incidentes debe efectuarse cuando está determinada la base y los honorarios que correspondieren al proceso principal. Ello surge del propio texto del art. 59 de la Ley arancelaria al fijar como referencia ineludible los honorarios del principal y la vinculación mediata o inmediata con la solución que se acuerde al mismo.

Por el proceso principal se reguló honorarios al letrado del actor como ganador, en la suma de \$ 360.000 equivalente a 2 consultas escritas y a este letrado la suma de \$ 279.000 (doble carácter). Por el incidente de nulidad resuelto el 28/12/2021 en la suma de \$ 55.800 equivalente al 20 % de lo calculado en el principal (ganador en el incidente), y al letrado de la parte actora (perdedor en el incidente) en la suma de \$ 36.000 equivalente al 10 % de lo calculado en el principal.

Me agravia la ecuación por cuanto el *a quo* reguló al suscripto un porcentaje equivalente al 20 % como ganador en el incidente, pero omitió tomar como base regulatoria a los fines de los cálculos de mis emolumentos como ganador en el principal, porque caso contrario al no tomarse como base la regulación de mis honorarios como ganador, la misma va a estar mal efectuada por cuanto siempre se me va a regular como perdedor. Es decir que el *a quo* debió formar la base regulatoria para regular mis honorarios en el incidente como si fuera ganador en el principal, y recién ahí, aplicar el porcentaje del 20 % de lo que me correspondería en el proceso principal como ganador. Por tales motivos solicito se revoque el punto V) de la sentencia del 30/11/2023 determinándose los honorarios de acuerdo a lo argumentado.

- Respecto de la **HONORARIOS DE PERITO**:

**IX –** Me agravia la sentencia recurrida en cuanto expresa: “...Se tomará como base, el capital reclamado en la demanda de \$78.000.-, al cual se adicionan los intereses de la tasa pasiva que fija el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha de la mora en 20/12/2014, hasta la fecha del último índice disponible; actualización que arroja la suma de \$961.645,70.- (Pesos Novecientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco C/70/100).

Consecuentemente y conforme a lo dispuesto por los Arts. 10 y 11 de la Ley 4.193, se asignará al Perito el 8% de dicha base, resultando así el monto regulado en la suma de \$76.931,65.- (Pesos Setenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Uno C/65/100), atento al resultado arribado en autos.-...".

Me agravian los argumentos antes citados por cuanto se toma el Capital y se adicionan los intereses con la tasa pasiva que fija el BCRA, cuyos argumentos sobre el tema ya fueron expuestos con anterioridad y a los cuales me remito en honor a la brevedad, entendiendo además que, se cumple con los recaudos del artículo 777 del CPCCT por ser una remisión a un argumento de este libelo.

En relación al porcentaje de un 8 % asignado al Perito en la sentencia regulatoria de honorarios me causa agravio por cuanto el porcentaje es excesivo atendiendo a las pautas fijadas por el art. 10 de la Ley 4.193. La tarea que desarrolló el Perito ha sido una simple tarea de determinar si la firma del Sr. Quevedo pertenece o no a su puño y letra, y no otra cosa. Ni siquiera se impugnó, sino que se pidió una aclaratoria la que no prosperó por decisión del *a quo*. Es decir que, la tarea desarrollada por el Sr. Perito ha sido una tarea ínfima sin mayor complejidad ni tampoco existe alguna cuestión novedosa, y no se tuvo en cuenta tampoco la posición económica y social de la parte, en este caso del Sr. Quevedo que es un simple trabajador. Tampoco se tuvo en cuenta el tiempo empleado en la solución del litigio que como ya se expresó anteriormente fue de 6 meses, con una activa participación del demandado, inclusive notificándose espontáneamente y dándole curso al proceso evitando la demora del mismo.

También es del caso señalar hacer una comparación entre la importancia del trabajo realizado por el letrado apoderado del demandado que actuó en todo el proceso (oposición de excepciones, apertura a prueba, ofrecimiento y producción de pruebas, y otros escritos instando el proceso). Todo ese trabajo profesional del letrado apoderado ha merecido en la consideración del *a quo*, un porcentaje equivalente al 8 % del monto del juicio. Ese mismo porcentaje del monto del juicio ha determinado el *a quo* que corresponde regular al Sr. Perito designado en autos, quien solamente ha

actuado en un cuaderno de pruebas, haciendo un dictamen respecto de si la firma pertenece o no al Sr. Quevedo, sin tener en consideración además que el Sr. Perito hizo venir al Sr. Quevedo de la Ciudad de Salta para audiencia de formación de cuerpo de escritura sin comunicar en tiempo y forma que, no asistiría a la misma, motivo por el cual el Sr. Quevedo sin formular ninguna objeción pese a los gastos que le ocasionó ese viaje desde otra provincia aceptó que se fije nueva fecha para la realización de la pericia. Todo ello no fue tenido en cuenta por el *a quo* al momento de la regulación de honorarios del Sr. Perito a quien se le reguló sus emolumentos de manera excesiva. Es por tales motivos, que solicito se haga lugar al Recurso de Apelación en contra de los honorarios regulados al Perito designado en autos, se revoquen los mismos y se reduzcan a sus justos límites.

- **PETITORIO**

- 1) Se tengan por expresados los agravios en tiempo y forma. Se corra traslado a la actora por el término de ley.
- 2) Oportunamente, se haga lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, y se revoque la sentencia del 30/11/2023 por contrario imperio, modificándose los puntos **I), III), IV), V) y VI)** de la parte resolutive, con costas a la parte actora.
- 3) Hago expresa reserva de caso Federal.

**Proveer de conformidad,**

**SERÁ JUSTICIA**